

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5469-2021
CARATULADO : DEL PERO/FISCO / CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veinte de octubre de dos mil veintitrés

VISTO:

A folio 1 comparece la abogada Carmen Gloria De La Maza Palma, con domicilio en Paseo Phillips N° 451, oficina 1804, comuna de Santiago, en representación de SILVIA LIDUVINA DEL PERO BUSTOS, pensionada, domiciliada en Laguna Reda, pasaje 21, casa 2382, Concepción; BENEDICTA GEORGINA DEL PERO BUSTOS, pensionada, domiciliada en Volcán Antuco N° 415, San Pedro de la Paz; BRISELA DEL ROSARIO DEL PERO BUSTOS, comerciante, con domicilio en Pasaje Siete casa N° 2180 interior, Laguna Reda dos, Concepción; NANCY MARIANELA DEL PERO BUSTOS, empleada, con domicilio en Laguna Reda, pasaje 21 casa N° 2382, Concepción; CESAR RICARDO DEL PERO BUSTOS, empleado, con domicilio en Laguna Reda, pasaje 21 casa N° 2382, Concepción; JOHNNY JORGE DEL PERO BUSTOS, con domicilio en Padre Alberto Hurtado N° 1980, Lagunilla Norte, Coronel; y PATRICIA JEANNETTE DEL PERO BUSTOS, empleada, domiciliada en pasaje Calbuco, casa N° 2125, comuna de Puente Alto; e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del FISCO DE CHILE, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado Juan Antonio Peribonio Poduje, ignora profesión u oficio, domiciliado en Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago, a objeto que sea condenado al pago de la suma de \$700.000.000, por concepto del daño moral que han padecido sus representados con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado en contra del hermano de todos ellos, José Antonio Del Pero Bustos, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que este tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Manifiesta que el Estado de Chile espontáneamente, ha reconocido su



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WXEBXXXQMX

responsabilidad en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reparación respecto de José Antonio Del Pero Bustos, quien murió el día 19 de septiembre de 1973 a las 6:00 horas, en la vía pública por heridas múltiples de bala, según indica el certificado médico de defunción del Instituto Médico Legal, entregado a la familia. Añade que el informe de autopsia señala que el cuerpo de la víctima presentaba 37 impactos de bala y que ingresó al establecimiento en calidad de N.N., enviado por el Retén de Carabineros de Huechuraba.

Refiere que considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por la Corporación, el Consejo superior llegó a la convicción de que José Antonio Del Pero Bustos fue ejecutado por agentes del estado al margen del proceso legal, mientras lo mantenían privado de libertad, siendo este motivo por el cual se lo declaró víctima de violación a los derechos humanos.

Transcribe el relato de la hermana Silvia Del Pero, quien señala que José siempre fue muy trabajador, que vivían en el campo, en Concepción, inmersos en la extrema pobreza, y que al ser tantas las carencias, José viajó a Santiago, un año antes que lo mataran, en busca de oportunidades para poder ayudar a toda la familia, enviándole luego a su madre y resto de familia, dinero, alimentos y regalos, convirtiéndose así en el proveedor de aquella. Refiere que en septiembre de 1973, José les había contado que tenía pareja y que estaba embarazada, esperando el resto de grupo familiar poder conocerla, lo cual, sin embargo, nunca aconteció. Expresa que en septiembre del año 1973 alguien comunicó a sus padres que a José lo habían detenido y que luego de una búsqueda de él en diversos lugares, lo encontraron en una morgue envuelto en una bolsa de plástico, sin dedos y con su cara destrozada, con 37 impactos de bala –lo cual revelaría ensañamiento- y que los militares obligaron su entierro en el patio 29, en una fosa común.

Sostiene que los demandantes han tenido que soportar durante más de 40 años el injusto tratamiento del Estado de Chile en esta materia, consistente en impunidad y mentiras.

Asegura que el dolor y duelo que les provocó a sus representados lo relatado, nunca lo han podido superar, siendo incalculable el daño irrogado.

Realiza una exposición sobre la caracterización del daño en la familia y sus roles reproduciendo lo manifestado por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras) respecto del daño moral, social y las secuelas médico-psicológicas sufridas por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, las que describe, concluyendo que siendo claro que el hermano de sus mandantes fue



afectado en el derecho fundamental y primario a la vida por el Estado, con el consiguiente daño moral para su familia merecen esta, de acuerdo con el derecho y equidad, una reparación la que debe implicar el establecimiento de la verdad, la persecución y castigo a los culpables y la indemnización por los daños morales sufridos.

En cuanto al derecho, sostiene que los hechos previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes sancionados por nuestra legislación penal, también lo son por el derecho internacional público, como crímenes de lesa humanidad - como una categoría especial de crímenes de derecho internacional.

Describe normativa internacional aplicable a la materia indicando que se trata de crímenes ignominiosos e intolerables para la humanidad –como estos hechos de tortura que ahora se relatan- han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el caso de autos, en particular, tratándose de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura y persecución por motivos políticos.

Expone sobre la regulación de la responsabilidad del Estado en la Constitución Política, señalando que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supra constitucional y también legal, y todas ellas - cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público, citando jurisprudencia y doctrina al efecto.

Tratándose de la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, expresa que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), así como reconociendo el Derecho internacional imperativo o *ius cogens* ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden al deber general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del



Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Por otro lado, postula la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, indicando que la correcta resolución del caso sublite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto –como es fácil comprender – se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. Al respecto, pueden revisarse además los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados referidos a la obligación de cumplir los convenios, y a la imposibilidad de invocar reglas de derecho interno para incumplir un tratado.

Además, afirma la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, sosteniendo que la materia de qué trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas- implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Refiere que si bien por un lado es efectivo que en ninguna disposición expresa de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte, la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al



Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Asevera que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible.

Concluye que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el *jus in bello*.

Cita abundante jurisprudencia de la Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado por crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, manifiesta que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió la familia de la víctima consecuencia de su detención y posterior ejecución. La dolorosa situación que marcó la vida de estos hermanos, generando consecuencias con la que han debido convivir desde 1973 hasta ahora. Esto es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización.

A folio 12 el demandado contestó la demanda, solicitando que sea rechazada en todas sus partes, con costas.

Opone la excepción de improcedencia de la indemnización, por haber sido preterido legalmente los demandantes, fundada en que la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño



moral sufrido por muchos. Así, el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Señala que ante el *pretium doloris*, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto. Así, la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directamente por el daño.

Luego, opone la excepción de reparación satisfactiva señalando que el hecho que los demandantes no hayan tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de ésta.

Sostiene que, tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Además, opone la excepción de prescripción de 4 años, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo, a su juicio, rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por el actor, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, el 12 de abril de 2021 habría transcurrido en exceso el



plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo señalado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.

Precisa que estos programas, incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. Así, al respecto, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados.

En este sentido, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniaria, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre, las que detalla.

Concluye que, entonces, la acción deducida por los demandantes basada en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han



inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados en cuanto al daño sufrido por la detención y prisión política sufrida por su padre, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas, como se ha señalado precedentemente.

Por otra parte, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia.

Además, sostiene que en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos se debe considerar, en lo que corresponda, los pagos recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales concedieron, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral, por lo que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

A folio 16 la parte demandante evacuó la réplica reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en el escrito de demanda.

Sobre la excepción de preterición de parientes señala que el razonamiento de la contraria razonamiento constituye un error jurídico. Primero, por cuanto violenta la regla general en materia de reparación de daños (esto es: que la titularidad del derecho a ser indemnizado pertenece a todo aquel que ha experimentado los efectos lesivos del acto ilícito de forma directa e inmediata); segundo, por cuanto va contra el imperativo constitucional sobre trato igualitario y sin discriminaciones arbitrarias (art. 1º, inciso 1º, de la Carta Fundamental, junto con el art. 19, N° 2, de la misma Norma Fundamental); y, tercero, por cuanto restringe el acceso a la justicia de personas cuya única pretensión es abrir un proceso ante un tribunal competente destinado a que éste conozca y resuelva un determinado conflicto de intereses de relevancia jurídica (art. 19, N° 3,



Constitución Política de la República). Nada impide que los hermanos Del Pero Bustos puedan accionar ante la jurisdicción del Estado con miras a demostrar que ellos han experimentado una cierta clase de sufrimiento contraria a derecho y, por lo mismo, objeto de una meritoria reparación.

Respecto a la excepción reparación satisfactiva sostiene que aun estimando valiosos los actos de reparación simbólica lo cierto es que ninguno de ellos en particular -ni la suma total de esas muchas acciones agota el sentido jurídico de lo que debe entenderse por una reparación integral. En otras palabras: aquellos actos morales deben ir seguidos, además, de otra clase de actos reparatorios de carácter jurídico, a saber, una indemnización pecuniaria a favor de quien ha experimentado un sufrimiento ilícito y, encima, una indemnización que sea congruente con la intensidad del mal vivido. Como se ve se trata de dos grupos distintos de actos reparatorios: unos morales (simbólicos) y otros jurídicos (patrimoniales). Ambos son complementarios y habrán de ir a la par. No puede sostener que la reparación moral excluye a la jurídica y viceversa. Una sin la otra sólo equivale a una reparación parcial e inconclusa.

En cuanto a la excepción de prescripción expresa que la afirmación relativa a que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil es errónea -en primer lugar- por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos.

Tratándose del daño e indemnización reclamada indica que sobre cifras ha indicado lo pertinente en el escrito de demanda, pues la ley procesal exige pretensiones concretas. Por lo demás, en lo petitorio señala con claridad si parece excesivo lo pedido, se condene a *“la suma que S.S., disponga”*.

A folio 19 se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales debía recaer.

A folio 36 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Silvia Liduvina Del Pero Bustos, Benedicta Georgina Del Pero Bustos, Brisela Del Rosario Del Pero Bustos, Nancy Marianela Del Pero Bustos, Cesar Ricardo Del Pero Bustos, Johnny Jorge Del Pero Bustos y Patricia Jeannette Del Pero Bustos, interponen demanda en juicio ordinario de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WXEBXXXQMX

indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por los fundamentos de hecho y de derecho señalados en lo expositivo.

SEGUNDO: Que, el demandado solicitó el rechazo de la demanda en virtud de las defensas y excepciones referidas en la parte expositiva de la presente sentencia.

TERCERO: Que la parte demandante evacuó la réplica en los términos indicados en lo expositivo de este fallo. A su vez, el demandado no evacuó el traslado para la dúplica que le fuera conferido.

CUARTO: Que, con el objeto de fundamentar sus pretensiones, la parte demandante acompañó la siguiente prueba documental:

A folio 1

1) Certificado de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que señala que José Antonio Del Pero Bustos es víctima calificada de violación a los derechos humanos, conforme el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

2) Certificado de nacimiento de José Antonio Del Pero Bustos.

3) Certificado de nacimiento de Silvia Del Pero.

4) Certificado de nacimiento de Benedicta Del Pero.

5) Certificado de nacimiento deBrisela Del Pero.

6) Certificado de nacimiento de Nancy Del Pero.

7) Certificado de nacimiento de Cesar Del Pero.

8) Certificado de nacimiento de Johnny Del Pero.

9) Certificado de nacimiento de Patricia Del Pero.

A folio 23

10) Informe de daños emitido por Javier Castro Alfaro, psicólogo del programa PRAIS a nombre de Patricia Jeanette Del Pero Bustos.

11) Informe de daños emitido por Ximena Campos Tiznado, psicóloga del programa PRAIS, a nombre de Silvia Del Pero Bustos.

12) Sentencia dictada por la Corte Suprema, en la causa Rol 22856-2015.

13) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017.

14) Informe de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, (FASIC), denominado “Consecuencias de la desaparición forzada, sobre la salud en familiares de detenidos desaparecidos”, del mes de agosto de 2003.



15 Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado Norma técnica para la atención de salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.

16) Informe del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, denominado “Efectos físicos y psíquicos en los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos”, suscrito por la directora ejecutiva, Elena Gómez Castro, de enero de 2018.

QUINTO: Que, además, a folio 34 la parte demandante rindió prueba testimonial haciendo comparecer a Ada Patricia Vásquez Sepúlveda, quien al punto 1 declaró que para el golpe militar vivían en la misma casa con su familia y la familia Del Pero Bustos, en Concepción, y que José Antonio Del Pero se había ido a trabajar a Santiago por la necesidad de alimentos de sus hermanos y padres, ya que era el hermano mayor. Agrega que lo mataron el 19 de septiembre de 1973 la policía o los carabineros.

Señala que su familia sufrió mucho por la muerte de José Antonio, ya que también era su proveedor, por lo que los actores quedaron abanados, sin protección y con el dolor de haber perdido a su hermano.

Al punto 2 manifiesta que el daño sufrido se produjo porque las hermanas tuvieron que salir a trabajar desde chicas para llevar alimento a su hogar. Vendían en las calles frutas, verduras, dulces o cualquier cosa, por lo que se vieron afectados sus estudios.

Al punto 3 señala que los actores psicológicamente lo pasaron mal y en ese tiempo no se iba a médico, por lo que tenían que sanarse solos.

SEXTO: Que, sin perjuicio de no haber sido controvertido, del mérito de las probanzas descritas, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido el hermano de los demandantes víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma



generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

OCTAVO: Que los vejámenes de que fue víctima el hermano de los demandantes de autos han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la



ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

NOVENO: Que, asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

DÉCIMO: Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$ 1.353.798 y \$ 1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de 1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

UNDÉCIMO: Que las leyes precedentemente señaladas, denominadas "leyes de reparación", si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WXEBXXXQMX

deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciias permitidas y equiparidad de beneficios que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

De acuerdo con lo razonado, procederá el rechazo de las excepciones de controversia de los hechos, preterición y de reparación integral opuestas por el demandado.

DUODÉCIMO: Que, en tercer lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

DÉCIMO TERCERO: Que la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

DÉCIMO CUARTO: Que la prescripción extintiva de la acción deducida



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WXEBXXXQMX

no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

DÉCIMO SEXTO: Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que, en la especie y como ya se ha dicho, se ha acreditado suficientemente que el hermano de los demandantes fue víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es



bastante para haber generado en sus familiares directos, tales como sus hijos, secuelas como las descritas en el libelo, y también por los informes psicológicos acompañado, suponiendo todo esto una inconmensurable aflicción tanto espiritual como física experimentada por el actor, difícilmente superable por el mero transcurso del tiempo, y que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

DÉCIMO OCTAVO: Que el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse el hermano del actor privado arbitrariamente de su libertad personal y luego habiendo sido desaparecido. De esta manera, las conductas materializadas por agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por los demandantes, encontrándose el primero en definitiva, obligado a indemnizar al segundo.

DÉCIMO NOVENO: Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente que en el presente juicio no ha sido acreditado que los actores hayan sido beneficiarios de pensiones pecuniarias por parte del Estado, ni tampoco su monto. No obstante ello, y teniendo presente lo ya consignado en los motivos precedentes, la suma que con motivo de esta sentencia se concederá a los demandantes a título de daño moral se fijará en la suma de \$15.000.000 para cada uno de ellos.

VIGÉSIMO: Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, es cierto también que la decisión contenida en la misma sentencia se propone dirimir el conflicto en forma definitiva e impone una condena pura y simple a pagar esta suma de dinero con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en su contra. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia



y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento espontáneo por el deudor a contar del instante en que la sentencia surte sus efectos, es decir, desde su notificación legal. En este sentido, la meramente hipotética disconformidad de la parte vencida con el fallo y el ejercicio eventual de medios recursivos en su contra, no enerva la aptitud del fallo para disponer actualmente la condena del deudor, fijando con certeza inmediata el monto de la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “confirmación” del tribunal superior) y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital adeudado los intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce a que en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarán sin resarcir.

Por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de este.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

I.- Que se rechazan las excepciones de preterición, reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.

II.- Que se acoge, parcialmente, la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, a folio 1, sólo en cuanto se condena al demandado Fisco de Chile, por concepto de daño moral, la suma de \$ 15.000.000 en favor de cada uno de los actores.



III.- Que las sumas decretadas precedentemente deberán ser pagadas con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a contar de la época de notificación de la presente sentencia a la parte demandada y hasta la época de pago efectivo.

IV.- Que cada parte asumirá sus costas.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

**PRONUNCIADA POR GUSTAVO CERÓN SEGUEL, JUEZ
SUBROGANTE**

En **Santiago**, a **veinte de octubre de dos mil veintitrés**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WXEBXXXQMX